



Outlook

95

---

## RECURSO APELACIÓN PRF NO. 80503-2017-28946

---

Desde Giovanni Camacho Caballero <giovannyjuridico@gmail.com>

Fecha Lun 5/05/2025 2:51 PM

Para CGR Responsabilidad Fiscal (CGR) <responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co>; Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) <luis.villalba@contraloria.gov.co>

📎 1 archivo adjunto (227 KB)

RECURSO APELACIÓN PRF-80503-2017-28946.pdf;

Barrancabermeja, 5 de mayo de 2025

Doctor

**LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO**

Contralor Provincial Ponente

Gerencia Departamental Colegiada del Meta

Contraloría General de la República

E. S. D.

**ASUNTO:** Recurso de apelación contra el auto de fecha 25 de abril de 2025 mediante el cual se resuelve la solicitud de nulidad del proceso ordinario de responsabilidad Fiscal No. PRF-80503-2017-28946.

El suscrito apoderado de ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO, a través del presente me permito sustentar el RECURSO DE APELACIÓN contra el auto de fecha 25 de abril de 2025 mediante el cual se resuelve la solicitud de nulidad del proceso ordinario de responsabilidad Fiscal No. PRF-80503-2017-28946, a través del cual se negó "la práctica" (sic) decreto de las pruebas requeridas por la defensa en el proceso del asunto, para lo cual se adjunta documento contentivo del recurso.

Sin otro particular,

EDINSON GIOVANNY CAMACHO CABALLERO

Apoderado

Barrancabermeja, 5 de mayo de 2025

Doctor

**LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO**

Contralor Provincial Ponente

Gerencia Departamental Colegiada del Meta

Contraloría General de la República

E. S. D.

**ASUNTO:** Recurso de apelación contra el auto de fecha 25 de abril de 2025 mediante el cual se resuelve la solicitud de nulidad del proceso ordinario de responsabilidad Fiscal No. PRF-80503-2017-28946.

El suscrito apoderado de ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO, a través del presente me permito sustentar el RECURSO DE APELACIÓN contra el auto de fecha 25 de abril de 2025 mediante el cual se resuelve la solicitud de nulidad del proceso ordinario de responsabilidad Fiscal No. PRF-80503-2017-28946, a través del cual se negó "la práctica" (sic) decreto de las pruebas requeridas por la defensa en el proceso del asunto.

### **RAZONES DEL RECURSO DE APELACIÓN**

1. Luego de la lectura del auto recurrido se observa la ausencia de motivación por parte de la autoridad administrativa en la negativa a las pruebas allegadas (documentales), así como por la testimoniales requeridas como fundamentales para la debida defensa de la ex funcionaria.

En este sentido, se debe indicar que inicialmente se solicitó esta práctica probatoria por considerarlo fundamental para determinar el grado de intervención de ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO, y porque la testigo inicial, (RUBIELA BARAJAS) conoce de las acciones por mi defendida desplegada en el periodo de su ejercicio como gestora técnica. Este testimonio indicaba la necesidad de conocer el pronunciamiento de quien procedió a la liquidación del convenio 5211512. Más aun, se indicó expresamente y se argumentó debidamente la necesidad y conducencia de la prueba en vista de que esa declaración testimonio permitirá determinar el hecho generador del daño, así como la intervención realizada por mi asistida en el desarrollo del convenio indicado.

Por otro lado, también se solicitó el testimonio de JAVIER IGNACIO MOLINA PALACIO, pues, conoce de las acciones por ella desplegada en el periodo de su ejercicio como gestora técnica, ya que, al igual que BARAJAS procedió a la liquidación del convenio 5211512 en condición de gestor técnico. Su testimonio permitirá determinar el hecho generador del daño, así como la intervención realizada por mi asistida.

2. Ahora bien, revisado el auto recurrido no existe ninguna argumentación que sustente la negativa a las pruebas, pues, se observa ligereza en la negativa, más aun, cuando con el descargo o pronunciamiento de argumentos de defensa se allegaron documentales pertinentes. Por otro lado, respecto a la prueba testimonial solo se dice escuetamente que se niegas "por considerarlas innecesarias", sin más, sin argumentar por qué están innecesarias; sin dar argumentaciones fácticas o jurídicas de esta manifestación genérica.

3. Debo indicar que, en un proceso de responsabilidad fiscal, la autoridad competente está obligada a garantizar el derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la prueba (artículo 29 de la Constitución Política de Colombia). La negativa de pruebas solicitadas debe estar **debidamente motivada**, conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución y el Código General del Proceso y las normas establecidas en la ley 610 de 2000.

Para el caso concreto, indico la ausencia de argumentación y sustento en la negativa de pruebas, y su mantenimiento por el funcionario de alzada, constituiría una violación al debido proceso, ya que, no explica la relación entre la negativa y los criterios legales de admisibilidad de pruebas (pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad, idoneidad, según las normas vigentes aplicables). Por otro lado, no se justifica cómo las pruebas solicitadas carecen de relevancia para los hechos controvertidos o el objeto del proceso, y que fueron expuestos en la solicitud correspondiente, lo que supone que el auto omite un análisis individualizado de cada prueba solicitada, recurriendo a fórmulas genéricas, tal como "las pruebas no son pertinentes" sin mayor explicación ni sustento.

Más aun, el funcionario instructor no considera el contexto fáctico y jurídico del proceso, como los elementos del daño fiscal (existencia del daño, imputación al responsable, nexo causal), que deben ser probados y que es precisamente la fuente de la solicitud probatoria.

En este caso, se insiste, el auto simplemente afirma que las pruebas "no son necesarias" sin evaluar su relación con los hechos que mi asistida busca demostrar (como la ausencia de dolo o culpa grave, la no participación en la conducta o la falta de nexo causal), la decisión por ese motivo, es arbitraria y supone una desventaja para la actividad defensiva.

Cabe indicar que para determinar si las pruebas negadas eran pertinentes, idóneas y conducentes, es necesario evaluarlas frente a los hechos controvertidos en el proceso de responsabilidad fiscal, en este sentido, debo recordar que la pertinencia se refiere a la relación directa entre la prueba y los hechos que se pretenden probar. En un proceso de responsabilidad fiscal, los hechos relevantes suelen incluir: 1) la existencia de un daño al patrimonio público, 2) la imputación de la conducta al presunto responsable (dolo o culpa grave, según el artículo 5 de la Ley 610 de 2000) y el nexo causal entre la conducta y el daño. En este caso, precisamente, la argumentación está orientada en el descargo o argumentos de defensa a demostrar que mi asistida fue delegada como gestora técnica del convenio 5211512 a partir del adicional número 2 y obedeció a que se desempeñaba como profesional II para articular la gestión social del Meta y dependía de la señora MARIA TONELLI, Directora de la Unidad de Gestión Social nivel nacional; ORLANDO ROJAS como jefe del entorno regional en la nueva estructura de Ecopetrol y JULIO ZULETA como líder regional del Meta y Vichada. (ver estructura jerárquica para septiembre del 2013 en el Meta).

Cabe destacar que la administración del convenio primigenio y el adicional N°1 venía siendo ejecutada por **Gonzalo Murillo y la Gestoría Técnica por Vanessa Constain y Julio Zuleta**, no obstante, para el cargue en SAP del adicional N° 2 se evidenció que Gonzalo Murillo continuaba asignado como administrador pese a las nuevas funciones que había asumido desde el mes de marzo de 2013 como coordinador nacional de la Red Prodepaz. Frente a la solicitud elevada vía correo electrónico por la funcionaria DIANA CAROLINA SARMIENTO de energéticos a Maria Tonelli se solicitó el cambio de administrador y gestor técnico y administrativo, razón por la cual no siendo una función de la directora de Gestión

955

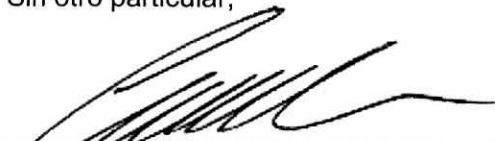
Social procedió de acuerdo al memorando del 23 de agosto del 2013 a delegar en mi asistida y en IBETH XIOMARA CONTRERAS profesional de Ecopetrol la gestoría técnica del convenio 5211512.

Si lo anterior es así, no se entiende cómo no se escucha a los liquidadores y quienes conocieron cada etapa de proceso, precisamente para que determinen la inexistencia de gestión fiscal. Más aun, la conducencia implica que la prueba es adecuada para acreditar o desvirtuar el hecho controvertido. Una prueba es conducente si tiene la capacidad de influir en la decisión del juez o autoridad administrativa. En este caso, básicamente se está desechando la posibilidad de probar la inexistencia de gestión fiscal por parte de mi asistida, así como el rol que desempeñó hasta el momento en que fungió como responsable en ese proceso. Por ese motivo, el auto que niega estas pruebas argumentando que "no son necesarias" sin analizar su capacidad para esclarecer los hechos, la decisión carece de sustento, pues el artículo 177 del CPACA obliga a la autoridad a admitir todas las pruebas que puedan contribuir a la verdad material.

### **SOLICITUD**

Con fundamento en lo anterior solicito revocar el auto de fecha 25 de abril de 2025 mediante el cual se resuelve la solicitud de nulidad del proceso ordinario de responsabilidad Fiscal No. PRF-80503-2017-28946, por medio del cual se niega la "práctica" de pruebas solicitadas por la defensa y en su lugar decretar la totalidad de medios defensivos (testimoniales y documentales) presentados por ANA MILENA ESTUPIÑAN PINTO.

Sin otro particular,



**EDINSON GIOVANNY CAMACHO CABALLERO**

Apoderado